

REPUBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE

Auto Interlocutorio

Santiago de Cali, dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Radicación No. : 76001-23-33-000-2022-00026-00
Medio de Control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante : FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.
notificacionesjudiciales@fla.com.co
Demandado : DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA
njudiciales@valledelcauca.gov.

Magistrado Ponente: FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

Habiéndose surtido el traslado de que trata el artículo 233 del C.P.A.C.A., procede el Despacho a resolver la solicitud de medida cautelar efectuada por la parte actora, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Sobre la solicitud de medida cautelar el artículo 231 del C.P.A.C.A., señala:

“...Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurren los siguientes requisitos:

- 1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.*
- 2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.*
- 3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.*
- 4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:*
 - a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o*
 - b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.”.*

De conformidad con la norma transcrita, al momento de analizar la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional de un acto administrativo, es necesario realizar un estudio comparativo entre el contenido del mismo y las normas invocadas como violadas, junto con las pruebas aportadas al expediente.

El demandante en el acápite de normas violadas, invoca las siguientes disposiciones superiores y legales por indebida aplicación, errónea interpretación e infracción de las normas en las que el acto debe fundarse, a saber: artículos 1, 2, 6, 29, 121, 123, 209, 211, 224 y siguientes; 303, 305 y 336 de la Constitución Política; el artículo 74 del Acuerdo de Integración Subregional Andino; La ley 1816, en especial los artículos 2, 6, 9, 10, 12, 28; La ley 489, artículo 9; la Ley 1437, en especial sus artículos 3, 42 y 44 y, el Decreto Departamental 1-3-0156 del 12 de febrero de 2018, expedido por la Gobernadora del Valle del Cauca

Ahora bien, efectuado el análisis de confrontación del acto demandado con las precitadas disposiciones, y estudiadas las pruebas documentales allegadas con la demanda, no se advierte prima facie que surja conclusión en el sentido de que exista disconformidad de los actos con tal normatividad, toda vez que la constatación de los cargos de violación de las normas invocadas a las cuales indiscutiblemente han debido sujetarse los actos, se requiere de un estudio y análisis jurídico más profundo, que se realizará a medida que el proceso avance en sus etapas, y se enriquezca con el material probatorio a recaudar a instancia de la parte actora, así como con las que se aportan y solicitan con la contestación de la demanda, e incluso, que se esclarezca con lo planteado en los alegatos finales.

De suerte que, las pruebas inicialmente aportadas por la parte actora, no permiten *per sé* concluir, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla, ni que de no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, y mucho menos que al no decretarse los efectos de la sentencia serían nugatorios.

Deviene entonces, que la prueba documental allegada con el libelo, deberá ser valorada de manera conjunta con los demás elementos probatorios que se arrimen al sumario, en el fallo que en derecho corresponda.

Por estas razones, no se concederá la suspensión provisional de los actos demandados.

En consecuencia, se **RESUELVE:**

NIEGASE la suspensión provisional del acto acusado.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

El Magistrado,



FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ